



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: JAIRO DE JESÚS ÁLVAREZ LÓPEZ
Demandado: ACP COLPENSIONES, Y LAS JUNTAS – REGIONAL Y NACIONAL
- DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
Radicado: 05001 31 05 004 2018 00568 01
Sentencia: S-225

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a estudiarse en grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín el día 31 de octubre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JAIRO DE JESÚS ÁLVAREZ LÓPEZ demandó a COLPENSIONES, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y la JUNTA

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, para que se dejen sin efecto los dictámenes elaborados por cada una de estas entidades y se acoja en su lugar el emitido por la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA de la Universidad de Antioquia. En consecuencia, pretende se ordene el pago de la pensión de invalidez en forma retroactiva desde la fecha de estructuración, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación y las costas procesales.

HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que ha padecido durante 3 años de dolor lumbar, por lo que fue diagnosticado con desvío de columna. Señaló que labora como jardinero y durante la vigencia del contrato de trabajo tuvo varias incapacidades por enfermedad general a raíz de sus patologías, y que desde el 15 de diciembre de 2015 se le han generado incapacidades y restricciones laborales de manera continua y discontinua. Manifiesta que fue calificado por COLPENSIONES con una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 32.39% y fecha de estructuración el 17 de diciembre de 2015, sin tenerle en cuenta todos los diagnósticos, discapacidades, escolaridad, edad y profesión; que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia determinó una PCL del 41.15% de origen común con fecha de estructuración del 17 de diciembre de 2015, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le otorgó un 45.93% de PCL con la misma fecha de estructuración ya dada por la Junta Regional.

Expresa que a raíz de su deterioro progresivo solicitó una nueva calificación a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la cual le otorgó una PCL del 54.46% con fecha de estructuración del 17 de diciembre de 2015. Y finalmente indica que los dictámenes emitidos por COLPENSIONES y las Juntas de Calificación tanto Regional como Nacional no hacen un análisis profundo y detallado desde el punto de vista físico, psíquico y sensorial.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES admite como cierto el padecimiento de dolor lumbar conforme a la prueba documental. No le consta la labor desempeñada por el actor ni las incapacidades presentadas. Es cierto que fue calificado por COLPENSIONES y que se interpusieron los recursos de ley; así mismo, es cierto que se realizó una nueva calificación a través de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, pero el estado de salud del demandante es carga probatoria de éste; que no le constan los demás hechos por ser consideraciones jurídicas de la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda, al ser esta entidad junto con las juntas, las competentes para realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de la solicitada prestación, inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios y la indexación, ausencia de causa para pedir, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

La JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, manifestó en su contestación que acepta la calificación realizada por esta entidad, pero los demás hechos no le constan. Se opuso a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico necesario para su prosperidad y como excepciones planteó la inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones.

La JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, expuso que es cierta la calificación efectuada por esta entidad y que raíz de ello, se evidenció que el demandante no alcanza el estado de invalidez. Frente a los demás hechos expuso que no le constan por ser circunstancias ajenas a la entidad. Respecto a las pretensiones señaló que se atiene a lo probado dentro de proceso. Como excepciones propuso legalidad del dictamen expedido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la

variación en la condición clínica de la paciente con aparición de otros diagnósticos con posterioridad al dictamen de la junta nacional exime de responsabilidad a la entidad, improcedencia del petitum: inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen - carga de la prueba a cargo del contradictor, improcedencia de las pretensiones respecto a la junta nacional de calificación de invalidez, competencia del juez laboral y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 31 de octubre de 2022, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, 1) **DECLARÓ** que el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez de origen común al acreditar una PCL superior al 50%, dando valor y capacidad demostrativa al dictamen de PCL elaborado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, rendido el 15 de noviembre de 2017, en el que se estableció la PCL del 54.46% con fecha de estructuración 17 de diciembre de 2015, de origen común, apartándose de los dictámenes presentados por COLPENSIONES y las Juntas –Regional y Nacional- de calificación de invalidez; 2) **CONDENÓ** a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común en favor del demandante, exigible a partir del día 17 de diciembre de 2015, en 13 mesadas anuales a razón del salario mínimo legal mensual vigente, con los descuentos obligatorios en salud; 3) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y pagar el retroactivo de la pensión de invalidez al demandante en la suma de \$72'561.735, y a partir del 1º de octubre de 2022, se obligó a COLPENSIONES a seguir pagando la mesada de \$1'000.000, en 13 mesadas anuales, y sin perjuicio de los aumentos de ley; 4) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a la indexación sobre las mesadas retroactivas que se causan desde que se hicieron exigibles y hasta el momento del pago efectivo de la obligación; 5) **ABSOLVIÓ** de los intereses moratorios y **CONDENÓ** en costas a COLPENSIONES.

Como consideraciones de su decisión, expuso que los argumentos

presentados por la perito de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, son técnicos y razonables, y por tal razón se le debe dar valor al mismo, sin tener razones válidas para desestimar dicho dictamen, pues el actor goza de una avanzada edad y debió ser calificado como lo explica la perito; de igual forma, expone que no se pueden declarar nulos los demás dictámenes, ya que fueron hechos acorde a la ley, siendo más exacto y certero con las enfermedades presentadas por el actor, el de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

El presente proceso se conoce en grado jurisdiccional de **Consulta**, en favor de COLPENSIONES, toda vez que ninguna de las partes recurrió.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Una vez surtido el traslado respectivo, el apoderado de COLPENSIONES en sus alegatos señaló las entidades competentes para proferir la calificación del estado de invalidez de una persona, conforme al artículo 41 de la ley 100 de 1993, indicando que conforme a los dictámenes emitidos por estas entidades el demandante no tiene una pérdida de capacidad laboral, no siendo posible acceder a lo pretendido por el actor. Y manifestó que no son procedentes los intereses moratorios, ya que no hay demora en el pago de la mesada pensional, por no haber ingresado el derecho pretendido al patrimonio del pensionado.

CONSIDERACIONES:

Se procede a revisar el presente proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Ante todo, hechos tales como los siguientes, están objetivamente probados:

- i) JAIRO DE JESÚS ÁLVAREZ LÓPEZ nació el 18 de noviembre de 1947;
- ii) fue calificado por COLPENSIONES el 3 de febrero de 2016¹, con una PCL del **32.39%**, de origen común y fecha de estructuración el 17 de diciembre de 2015;
- iii) la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia², según dictamen del 25 de julio de 2016, le determinó una PCL del **41.15%**, mismo origen común y fecha de estructuración 17 de diciembre de 2015;
- iv) que a través del dictamen³ del 19 de julio de 2017, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a su vez, le determinó una PCL del **45.93%** estructurada el 17 de diciembre de 2015;
- v) que por medio de la resolución SUB 74881 del 21 de marzo de 2018⁴, COLPENSIONES le negó la pensión de invalidez; y
- vi) que se le realizó de forma particular un nuevo dictamen elaborado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el 15 de noviembre de 2017⁵, en donde se le dictaminó una PCL del **54.46%** y con fecha de estructuración del 17 de diciembre de 2015.

A partir de lo anterior, procederá la Sala a revisar si es procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez, al igual que el retroactivo pensional de forma indexada.

¹ Folios 29 a 41 de la demanda

² Folios 43 a 49 de la demanda

³ Folios 51 a 63 de la demanda

⁴ Folios 71 a 76 de la demanda

⁵ Folios 95 a 101 de la demanda

1. Requisitos para el reconocimiento de la prestación económica de invalidez

Para acceder al reconocimiento de una pensión de invalidez, sea de origen laboral o común, el afiliado debe acreditar los requisitos consagrados en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 (este último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003), los cuales indican que tiene derecho a tal prestación quien sufra una pérdida de capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, igual o superior al 50%, además de que cumpla con otras condiciones relacionados con el número mínimo de semanas cotizadas al sistema pensional.

En el presente caso, el señor JAIRO DE JESÚS ÁLVAREZ LÓPEZ sustenta su pretensión a la pensión de invalidez en el sentido de que en los dictámenes elaborados por las entidades demandadas no se le tuvieron en cuenta todos los diagnósticos, discapacidades, escolaridad, edad y profesión, e igualmente en que no se realizó un análisis profuso y detallado de todos los elementos que concurren en la calificación desde el punto de vista físico, psíquico y sensorial.

Sobre esta situación particular, infiere la Sala que, como a continuación se justificará, habrá de arribarse a la misma conclusión adoptada por el juez a quo en su sentencia, esto es, que el demandante cumple con las exigencias legales para que pueda ordenarse en su favor el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, aunque con algunas variaciones en lo que respecta al porcentaje asignado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Lo primero por advertir es que el artículo 41 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del decreto 19 de 2012, señala que la calificación del estado de invalidez será determinado con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez⁶ (MUCI) vigente a la

⁶ Para el presente caso, se hace con base en el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014

fecha de calificación, y que le corresponde a COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las Compañías de Seguros y a las Entidades Promotoras de Salud, determinar, en una primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias.

De igual forma consagra dicho artículo que en caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, podrá manifestar su inconformidad dentro de los 10 días siguientes y la entidad lo remitirá a las Juntas de Calificación de Invalidez de orden regional dentro de los 5 días siguientes, decisión que, a su vez, es apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de 5 días. Por último, señala que contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

Por otro lado, la Corte Constitucional a través de sentencia C-120 de 2020, al declarar exequible el segundo inciso del artículo 142 del decreto 19 de 2012, fue clara en manifestar que existen dos eventuales procedimientos para controvertir los dictámenes, uno administrativo y otro judicial, siendo este último posterior, teniendo en cuenta que existe una capacidad institucional en donde se confía a expertos la calificación de la capacidad laboral, siempre fundada en criterios objetivos.

Atendiendo a lo dicho, se partirá de la base indiscutida de la existencia de varios dictámenes elaborados en la etapa administrativa, donde **no** se **superó** el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del 50%, analizándose en cada uno de ellos el Título I, el cual habla de las deficiencias, y el Título II que dice relación a la valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, de los cuales se extraen los siguientes resultados:

COLPENSIONES	JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
Lumbago no especificado	Trastorno de disco lumbar (dolor crónico lumbar)	Trastornos especificados de los discos lumbares
Gastritis crónica, no especificada	Enfermedad gástrica (desordenes de tracto digestivo)	Enfermedad gástrica
Hipertensión esencial (primaria)	Hipertensión arterial	Hipertensión arterial
Dolor crónico	Dolor somático	Disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor crónico somático
Trastornos especificados de la próstata	Prostatitis	Prostatitis aguda
Título I (Valoración de las deficiencias anteriores)		
Deficiencias ponderadas: 22,39%	Deficiencias ponderadas: 24,35%	Deficiencias ponderadas: 24,13%
Título II (Valoración Rol laboral, Rol ocupacional y otras áreas ocupacionales)		
Rol ocupacional: 10%	Rol laboral 14% y otras áreas ocupacionales: 2,8% Total: 16,80%	Rol laboral 19% y otras áreas ocupacionales: 2,8% Total: 21,80%
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL -PCL- TOTAL		
Porcentaje: 32.39%	Porcentaje: 41.15%	Porcentaje: 45.93%
Estructuración: 17 de diciembre de 2015	Estructuración: 17 de diciembre de 2015	Estructuración: 17 de diciembre de 2015

Desde la presentación de la demanda la parte actora señaló las razones por las cuales discrepa de los dictámenes emitidos por COLPENSIONES y las JUNTAS, indicando que presentan imprecisiones, pues considera que no se le tuvieron en cuenta todos los diagnósticos y los padecimientos sufridos como consecuencia de su enfermedad, como tampoco se reparó temas tales como la escolaridad, la edad y su profesión.

Inconforme con dichas calificaciones, el actor buscó realizarse particularmente un nuevo dictamen, esta vez ante la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, el 15 de noviembre de 2017, en donde se evaluaron las deficiencias del Título I traídas a continuación, y el Título II, en lo que respecta al rol

ocupacional junto con otras áreas ocupacionales, otorgándole al demandante una PCL del **54.46%**:

Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia
Título I
Lumbago
Gastritis
Hipertensión arterial
Dolor Crónico
No se incluye la prostatitis (ya fue "resecada" operada)
Deficiencias ponderadas: 24,36%
Título II
Rol ocupacional: 25% y otras áreas ocupacionales 5,1%. Total: 30,1%
PCL TOTAL
Porcentaje de PCL: 54,46%
Fecha de estructuración: 17 de diciembre de 2015 (Concepto de rehabilitación de neurocirugía)

A propósito de la controversia generada en el presente caso con la pérdida de capacidad laboral y el dictamen traído por la parte actora, esta Sala considera pertinente recordar que es posible que los dictámenes de las juntas puedan ser controvertidos ante la jurisdicción ordinaria como ya se había dicho anteriormente, los cuales incluso pueden ser desvirtuados con la aportación de otros medios de prueba, correspondiéndole al juez evaluar y establecer la realidad de cada situación.

Lo anterior se complementa con lo establecido en el decreto 1352 de 2013, el cual, de manera específica, dispone en su artículo 44 lo siguiente: *"Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente"*.

En otras palabras, los dictámenes emitidos por las juntas calificadoras no son prueba solemne o incontestable, no son definitivos ni inmutables, no atan de ninguna manera al Juez y no tienen carácter absoluto o vinculante de forma tal que no permita apartarse de lo que en ellos se dice, pues se trata de un acto sometido a control jurisdiccional; así lo ha considerado además la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la del 19 de octubre de 2006, rad. 29.622, en la que se reitera lo dicho en providencia del 13 de septiembre de 2006, rad. 29.328 y cuyo criterio ha sido acogido más adelante en providencias como la 31.062 del 18 de marzo de 2009, la 53986 del 4 de noviembre de 2015, la SL 1044 del 20 de marzo de 2019, rad. 68074, o la SL 2349 del 28 de abril de 2021, rad. 83859 a cuyo texto se remite la Sala.

Pues bien, en lo que se refiere al dictamen pericial efectuado a través de la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, es necesario hacer hincapié que esta prueba pericial es un medio demostrativo en virtud del cual una persona ajena al proceso, con conocimientos especializados o técnicos, los aporta para que el juez pueda valorar mejor la naturaleza de los elementos a probar, sin olvidar que dicha prueba debe referirse a conceptos, juicios y máximas de experiencia de un saber especializado, sin embargo, no se puede pasar por alto que el juez está facultado para apreciar esa prueba o alejarse de la misma si lo considera procedente.

También observa la Sala que éste último dictamen aportado por el demandante, cumple en su totalidad con los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso, y que, valorado en su conjunto, es claro, preciso, imparcial, exhaustivo y detallado, explicando los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, así como los fundamentos técnicos y científicos de sus conclusiones.

En concreto, en lo que tiene que ver con las **deficiencias (Título I)** calificadas en el dictamen de la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, comparado con el elaborado por las demandadas, se puede ver a simple vista que solo se tuvo en cuenta 4 deficiencias y no 5 como lo hicieron los demás:

Colpensiones	Junta Regional de Calificación de Invalidez	Junta Nacional de Calificación de Invalidez	Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia
Lumbago no especificado	Trastorno de disco lumbar (dolor crónico lumbar)	Trastornos especificados de los discos lumbares	Lumbago
Gastritis crónica, no especificada	Enfermedad gástrica (desordenes de tracto digestivo)	Enfermedad gástrica	Gastritis
Hipertensión esencial (primaria)	Hipertensión arterial	Hipertensión arterial	Hipertensión arterial
Dolor crónico	Dolor somático	Disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor crónico somático	Dolor Crónico
Trastornos especificados de la próstata	Prostatitis	Prostatitis aguda	No se incluye la prostatitis (ya fue resecada - operada)

No obstante, este Título I (deficiencia) de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia arrojó un mayor porcentaje, el cual es acogido parcialmente por esta Sala, por la siguiente razón:

Si bien, las deficiencias fueron evaluadas acogiendo las mismas tablas del MUCI⁷, observa la Sala que la perito de la FACULTAD DE SALUD PÚBLICA, otorgó un mayor valor a las deficiencias de **Hipertensión arterial** y **dolor crónico**, sin embargo, para la Sala, solo está realmente acreditado con la historia clínica el dolor crónico del **20%**, al ser un dolor severo y de difícil manejo como se relata en todas las

⁷ Decreto 1507 de 2014

calificaciones y que erróneamente no había sido evaluado de esta manera, además de que en la historia clínica en varios apartes así se relata (Ven tabla 12.5, la cual habla de los porcentajes dados para esta deficiencia). No sucede lo mismo con el porcentaje del **11%** dado a la hipertensión arterial, ya que como lo señala la misma médico especialista MARTHA LUCÍA ESCOBAR en su dictamen, esta deficiencia está controlada, debiéndose en este sentido otorgar el porcentaje del 5%, el cual fue arrojado por todas entidades demandadas, y que se ajusta a la realidad.

Tabla 12.5. Deficiencia por disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor crónico somático.

CLASE	CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3
DEFICIENCIA TOTAL (%)	0%	10%	15%	20%
Descripción	No existe dolor crónico somático	Dolor crónico somático leve*	Dolor crónico somático moderado*	Dolor crónico somático severo*

Junta Nacional de Calificación de Invalidez	Porcentaje y tabla	Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia	Porcentaje y tabla
Trastornos especificados de los discos lumbares	10% - Tabla 15,3	Lumbago	10% - Tabla 15,3
Enfermedad gástrica	20% - Tabla 4,6	Gastritis	20% - Tabla 4,6
Hipertensión arterial	5% - Tabla 2,6	Hipertensión arterial	11% - Tabla 2,6 (se tendrá el 5%)
Disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor crónico somático	15% - Tabla 12,5	Dolor Crónico	20% - Tabla 12,5
Prostatitis aguda	11% - Tabla 5,9	No se incluye la prostatitis (ya fue resecada)	

Así pues, al variar el porcentaje de las deficiencias de la calificación de la Facultad de Salud Pública, esta Sala procedió a realizar la fórmula de Balthazar, arrojando en el Título I (deficiencias) un valor de **22,64%**, el cual es muy cercano al determinado por COLPENSIONES, pero

haciendo la claridad que en este dictamen no se tomó la deficiencia de la Prostatitis.

Si se presentan varias deficiencias, se aplica la fórmula de combinación de valores de Balthazar que a continuación se describe:

Deficiencia combinada =

$$A + \frac{(100 - A) \times B}{100}$$

Por otro lado, en lo que se refiere al Título II (**Rol laboral, Rol ocupacional y otras áreas ocupacionales**), y que para la Sala resulta ser el de mayor relevancia, en la declaración efectuada por la médica MARTHA LUCÍA ESCOBAR, fue enfática en señalar que cuando calificó al demandante este poseía 70 años y que a raíz de sus enfermedades no estaba laborando, y por tal razón, tomó para practicar la calificación de este título, la tabla 14 del capítulo 4º, la cual permite hacer la valoración del adulto mayor, ya que era una evaluación mucho más cercana a la realidad, manifestación ésta que es acogida por esta Sala de Decisión, pues haciendo un análisis detallado del MUCI, se observa que efectivamente se le debió aplicar la tabla para los mayores de 60 años no activos laboralmente, como se puede observar a continuación:

3. Valoración del rol ocupacional relacionado con el uso del tiempo libre y de esparcimiento en adultos mayores.

Esta tabla aplica para los mayores de 60 años, no activos laboralmente, teniendo en cuenta que para desempeñar estos roles participan de acuerdo con sus gustos e interés, así como capacidad económica en diferentes actividades familiares y comunitarias, de forma individual o colectiva, acorde a su edad en diferentes contextos, participando en actividades de recreo y ocio, tales como: juegos y deportes informales, programas de bienestar físico, relajación, diversión o entretenimiento, ir a galerías de arte, museos, parques, cines, teatros y lugares públicos o privados; participar en manualidades o hobbies; leer por entretenimiento; interpretar instrumentos musicales; ir a ver paisajes, turismo y viajar por placer, entre otras.

También se incluyen actividades como socializar y participar en reuniones informales con otros, o visitar a amigos, familiares y reunirse en lugares públicos, así como las relacionadas con otras áreas ocupacionales tales como: alimentación, la higiene y vestido, el desplazamiento entre otras. Para estos casos, se utiliza la tabla 14.

Tabla 14. Valoración del rol ocupacional relacionado con el uso del tiempo libre y de esparcimiento en adultos mayores.

Clase	Categoría del rol	Porcentaje máximo asignado
A	Rol Ocupacional sin dificultad-no dependencia Con las habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento y otras áreas ocupacionales tales como: alimentación, la higiene y vestido, el desplazamiento entre otras. No requiere de ayudas. Es independiente.	0
B	Rol ocupacional con dificultad leve-no dependencia Con las habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento y otras áreas ocupacionales tales como: alimentación, la higiene y vestido, el desplazamiento entre otras requiere de mayor tiempo; no requiere de ayudas para las actividades. Es independiente. NO DEPENDENCIA.	10
C	Rol ocupacional adaptado con dificultad moderada-dependencia moderada Con las habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento y otras áreas ocupacionales tales como: alimentación, la higiene y vestido, el desplazamiento entre otras requiere del uso de ayudas técnicas para la ejecución de las actividades. DEPENDENCIA MODERADA.	25
D	Rol ocupacional con Dificultad severa-dependencia severa Con las habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento y otras áreas ocupacionales tales como: alimentación, la higiene y vestido, el desplazamiento entre otras amerita la ayuda de otras personas para el desarrollo de las actividades. La persona presenta una DEPENDENCIA SEVERA.	35
E	Rol ocupacional con dificultad completa-dependencia Grave-completa Con las habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación cuenta con la capacidad para iniciar, desarrollar y finalizar actividades de uso de tiempo libre y esparcimiento y otras áreas ocupacionales tales como: alimentación, la higiene y vestido, el desplazamiento entre otras, mediante ayudas técnicas y/o ayuda personal no realiza las actividades. DEPENDENCIA GRAVE-COMPLETA.	50

Conforme a todos los dictámenes emitidos por las demandadas, se observa que la única entidad que calificó al actor conforme al **Rol ocupacional** fue COLPENSIONES, ya que los demás se basaron en el **Rol Laboral**, no obstante, estos si valoraron otras áreas ocupacionales, lo que no sucedió con COLPENSIONES, como se relaciona a continuación:

COLPENSIONES	JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
Título II (Valoración Rol laboral, Rol ocupacional y otras áreas ocupacionales)		
Rol ocupacional: 10%	Rol laboral 14% y otras áreas ocupacionales: 2,8% - total: 16,80%	Rol laboral 19% y otras áreas ocupacionales: 2,8% Total: 21,80%

Ahora. De acuerdo a la tabla 14, el demandante encaja claramente en la clase C del rol ocupacional, y por tal razón se le debió dar el porcentaje del **25%** como se concibió en el dictamen de la Facultad de

Salud Pública, y no el 10% (clase B) como lo efectuó Colpensiones, pues ésta última entidad desde la realización de su calificación **dejó establecido** que el actor es dependiente en la marcha de su acompañante, requiriendo ayuda de la hija para el retiro y puesta de prendas, lo cual es reafirmado por la médico MARTHA LUCÍA ESCOBAR, quien expresa que en el examen físico se observó que el actor tiene que usar muletas para desplazarse siendo su estabilidad muy mínima, debido a su daño estructural y dolores causados, debiéndose establecer que el actor presenta una dependencia moderada.

Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia
Título II
Rol ocupacional: 25% y otras áreas ocupacionales 5,1%. Total: 30,1%

Así pues, solo resta analizar las **otras áreas ocupacionales**, en donde claramente el actor posee una pérdida del **5.1%**, y no del 2.8% como lo determinaron las Juntas -Regional y Nacional- de calificación de invalidez, pues al actor no solo se le debe calificar las categorías de movilidad, auto cuidado – cuidado personal y vida doméstica, ya que también se debieron realizar valoraciones en los ítems de aprendizaje y aplicación del conocimiento, debido a que el señor ÁLVAREZ LÓPEZ, presenta una dependencia moderada, lo cual dificulta sus habilidades motoras, requiriendo de ayudas técnicas para la ejecución de éstas, y que arrojan por supuesto un mayor valor en todos los ítems, tal y como lo determinó la perito MARTHA LUCÍA ESCOBAR en su calificación.

De lo anterior se puede concluir que fue correcta la decisión tomada por el juez de primera instancia, pues no hay duda alguna que la calificación de la Facultad de Salud Pública fue respaldada con la historia clínica íntegra y vigente, junto con las ayudas diagnósticas que complementen el criterio clínico, y así mismo, el porcentaje debe otorgarse con base en las secuelas permanentes y definitivas.

Así las cosas, con base en lo antes visto y efectuados los cálculos correspondientes, y variando el porcentaje de algunas deficiencias dadas por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el demandante posee una pérdida de capacidad laboral del **52,74%** (Deficiencia 22.64% + rol ocupacional 25% y otras áreas ocupacionales 5.1%), lo que lo hace persona inválida conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 10 de 1993. Cabe advertir, que en caso de acoger el porcentaje de otras áreas ocupacionales del 2.8%⁸, el demandante igualmente obtendría un porcentaje superior al 50%. En este sentido se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia, pero por otras razones.

En cuanto a la fecha de estructuración de la invalidez, se tiene que tanto las entidades demandadas como la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, señalaron como tal el **17 de diciembre de 2015**, toda vez que en dicha fecha fue cuando se estableció el concepto de rehabilitación de neurocirugía, de esta manera, una vez realizado el conteo de las 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, esto es, del 17 de diciembre de 2012, y el mismo día y mes de 2015, se logra comprobar que contabilizó un total de 92,29 semanas cotizadas en estos 3 años, colmando con ello el requisito de semanas exigidas por la norma.

Retroactivo pensional

Respecto al reconocimiento de la pensión de invalidez, el artículo 10 de la ley 100 de 1993, al hablar del sistema general de pensiones indica que su finalidad es garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en la ley, y en casos como la invalidez, el artículo 40 de la citada norma contempla que “...La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de

⁸ Porcentaje de PCL, tomando el ítem de otras áreas ocupacionales del 2.8%, sería de 50.44%

parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado."

Si bien, el citado artículo no hace la diferenciación entre causación y disfrute de la pensión de invalidez, debe señalarse que nuestro órgano de cierre en sentencia SL1562-2019, citada en la sentencia SL3447-2022, ha manifestado que ambas figuras confluyen en un solo momento, esto es, desde la estructuración de la invalidez, toda vez *"La norma no expresa, ni sugiere una condición diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento pensional desde su consolidación"*, por tal razón hacer una interpretación en otro sentido sería restringir su alcance protector, máxime si se acude a preceptos como los contenidos en los decreto 758 de 1990 y 917 de 1999, propios de un sistema de protección administrado por una sola entidad, debiéndose recordar que a partir de la vigencia de la ley 100 de 1993, la salud y el sistema de pensiones se administran bajo regímenes diferentes, por administradores autónomas, fondos independientes y distinta reglamentación.

De la prueba allegada al expediente, como es la historia clínica, NO se observa que el actor haya obtenido incapacidades posteriores a la fecha de estructuración, advirtiéndose además que en el dictamen de la Facultad de Salud Pública, que fue elaborado el 15 de noviembre de 2017, se estableció que el actor no ha podido desempeñar sus labores desde hace 2 años debido a su situación de salud, lo cual fue corroborado con lo manifestado en todos los otros dictámenes, en especial el elaborado en primera oportunidad por COLPENSIONES, el 3 de febrero de 2016, en donde se dijo que aquel *"no tiene antecedentes de rol laboral (trabajo/empleo remunerado por lo que se aplica rol ocupacional haciendo uso de la tabla 14 independiente de la edad"*.

En estas condiciones, se llega a la misma conclusión del juez de primera instancia, debiéndose reconocer la prestación económica de invalidez desde la fecha de estructuración, esto es, desde el 17 de diciembre de

2015. De igual forma, revisada la liquidación realizada por el juzgado, se ajusta a derecho, suficiente para **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia, junto con los descuentos en salud ya ordenados, **advirtiéndose** que en el caso de habersele generado y cancelado incapacidades como lo expresa el demandante en sus fundamentos fácticos, estos podrán ser descontados por parte de COLPENSIONES del retroactivo pensional reconocido al actor.

Indexación

En cuanto a la condena por indexación, esta se mantendrá, pues es claro que la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano es un hecho indudable, ya que cuando un pago no se hace en la fecha de su exigibilidad el mismo comienza a depreciarse, y la indexación es el mecanismo apropiado para combatir ese defecto, pues hay que tener en cuenta los efectos de la inflación son quizá más significativos en el campo laboral y de la seguridad social, dado el carácter alimentario de las prestaciones que el empleador o la entidad de seguridad social deben al trabajador o pensionado. Consecuentemente, la indexación que el juez dedujo merece entera **CONFIRMACIÓN**.

Costas procesales

Finalmente, en cuanto a la condena impuesta a COLPENSIONES por este concepto, en principio debe indicarse que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso COLPENSIONES presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas la validez de los dictámenes emitidos en sede administrativa y la consecuente

05001 31 05 004 2018 00568 01

imposibilidad de reconocer la pensión de invalidez reclamada, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales.

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será **CONFIRMADA**.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín el día 31 de octubre de 2022, pero se **PRECISA** conforme se dijo en la parte motiva, que en el caso de habersele generado y cancelado incapacidades como lo expresa el demandante en sus fundamentos fácticos, estos podrán ser descontados por parte de COLPENSIONES del retroactivo pensional reconocido al actor.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ba981da1d91c78c7fb658533bcd73b4b3a3418d1b9cbac148d2a85985d53089e**

Documento generado en 17/08/2023 03:12:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>